

Principles on Democratic Regulation of Community Broadcasting

**World Association of Community Radio Broadcasters
(AMARC)
may 3, 2008**

[DISEÑO PROVISORIO]

INTRODUCCION

Los “**Principios para un Marco Regulatorio Democrático sobre Radio y TV Comunitaria**” son una GUIA para la elaboración, aprobación e implementación de regulaciones sobre radiodifusión comunitaria que sean compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y el más amplio respeto a los derechos a la comunicación e información y la libertad de expresión.

El documento es resultado de la investigación «**Mejores Prácticas sobre Marcos Regulatorios en Radiodifusión Comunitaria**», que comparó los marcos regulatorios sobre radiodifusión de 29 países de los cinco continentes, de manera de identificar las mejores prácticas en legislación y políticas públicas dirigidas a reconocer y promover la radio y TV comunitaria.

El objetivo fue construir una herramienta útil para que la Sociedad Civil incida en la definición de políticas públicas y marcos regulatorios en radiodifusión, orientadas a lograr el reconocimiento y garantizar del ejercicio de los derechos de libertad de expresión e información a través de los medios comunitarios. Esperamos también que este documento sea útil a universidades y autoridades gubernamentales y legisladores interesados en reconocer sin discriminaciones a este sector.

Estos Principios, tomados a partir de las mejores prácticas a nivel mundial, buscan ser un insumo fundamental

para dar cumplimiento a una de las recomendaciones de la «**Declaración sobre Diversidad en la Radiodifusión**» elaborada en diciembre de 2007 por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, junto al Representante de la OSCE sobre Libertad de los Medios de Comunicación y los relatores para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP).

En la misma se afirma que la radiodifusión comunitaria debería estar “*expresamente reconocida en la ley como una forma diferenciada de medios de comunicación*”, beneficiada por “*procedimientos equitativos y sencillos para la obtención de licencias*”, permitirles acceso a publicidad y no establecer obstáculos técnicos para acceder a la radio y la TV.

Estos aspectos coinciden con las recomendaciones incluidas en la Declaración de “**Principios para un Marco Regulatorio Democrático sobre Radio y TV Comunitaria**”, por lo que AMARC espera que este documento sea revisado y recomendado por las Relatorías para la Libertad de Expresión y otros organismos de defensa de derechos humanos de todo el mundo como un estándar internacional de referencia para orientar la aprobación de marcos regulatorios de radiodifusión más justos, democráticos y respetuosos de la libertad de expresión.

PROCESO DE ELABORACION

El proyecto de investigación que concluyó en este documento fue desarrollado durante dos años por el Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de AMARC-ALC con el apoyo de Open Society Justice Initiative (OSJI).

Durante ese lapso se analizaron los marcos regulatorios de los países, se realizaron diversos talleres de trabajo, consultas electrónicas y telefónicas, así como presentaciones públicas de los avances de la investigación en distintas partes del mundo. En todo el proceso de construcción de estos “Principios” se contó con el aporte de expertos, directivos de emisoras y redes comunitarias, representantes de universidades, asociaciones de periodistas, redes regionales de comunicación y organizaciones de defensa de la libertad de expresión de distintas partes del mundo que fueron comentando y mejorando el texto final.

Entre otras, se desarrollaron actividades en Montevideo (Uruguay), Bilbao (Estado Español), Buenos Aires (Argentina), Washington (Estados Unidos), Bogotá (Colombia), Rabat (Marruecos), Puerto Príncipe (Haití) y Sydney (Australia).

Trabajaron en la investigación, en distintas tareas y etapas del mismo, por OSJI: Darian Pavli (legal officer, Freedom of Expression and Information) y Eduardo Bertoni (consultor, exRelator para la Libertad de Expresión de la OEA), por AMARC: Gustavo Gómez (director Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación AMARC-ALC), Damián Loreti (asesor jurídico de AMARC-ALC),

Aleida Calleja (vicepresidenta AMARC-Mundial) y Analía Eliades, Glenn Postolski, Carolina Aguerre y Walter Sena (consultores e integrantes del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de AMARC-ALC).

Expertos de diversas partes del mundo colaboraron con sus comentarios y aportes: Bruce Girard (Uruguay/Canadá), Sean O’Siochru (Irlanda), Tia Duer (Estados Unidos), María Victoria Polanco (Colombia), Beatriz Solís (México), Jean-Jacques Cheval (Francia), Cecilia Sánchez (Francia/Argentina), Evan Light (Canadá), Kate Coyer (Estados Unidos), Edison Lanza (Uruguay), José Angel Manrique (Venezuela), John Stevenson (Canadá), Juan Salazar (Australia/Chile), Esmeralda Ortiz (Colombia), Ricardo Iglesias (El Salvador), Toby Mendel (Canadá), Jorge Chacín (Venezuela), Siddarth Narrain (India) y Jamal Eddin Naji (Marruecos).

Dirigentes comunitarios, expertos y expertas de AMARC participaron y colaboraron en diversas instancias de análisis de las conclusiones del estudio y en la elaboración de los Principios. Entre otros: Steve Buckley (Inglaterra), María Pía Matta (Chile), Mauricio Beltrán (Colombia), Carlos Rivadeneira (Perú), Oscar Aguilera (Chile), José Luis Aguirre (Bolivia), Jürgen Moritz (México/Alemania), José Imaz (Uruguay), Arturo Bregaglio (Paraguay), Javier García (España), Elizabeth Robinson (Estados Unidos), Ricardo Sandoval (Guatemala), Iván Darío Chaín (Colombia), Grace Githaiga (Kenia), Mariano Sanchez (Estado Español), Perla Wilson (Chile), Marcelo Solervicens (Canadá/Chile),

George Christensen (Ghana), Zara Yacoub (Tchad), Fily Keita (Mali), Raghu Mainali (Nepal), Emmanuel Boutterin (Francia), Oumar Seck Ndiaye (Senegal), Amalia Jiménez (Guatemala/Estado Español), Agus Hernán (Francia), Mikel Estarrona (Estado Español), Sawsan Zaidah (Jordania) y Omar Mamadou (Benin).

La revisión final del texto fue realizada los días 28 y 29 de febrero de 2008, en la Universidad de Santo Tomás, en Bogotá (Colombia), durante el Seminario Internacional “Radios Comunitarias para un Mundo Mejor” realizado en el marco del 25° Aniversario de AMARC. El documento fue analizado y tuvo el visto bueno de los integrantes del Consejo Regional de AMARC-ALC y del Secretariado Internacional de AMARC, representantes nacionales de todos los países de América Latina y el Caribe, directores de Programas y representantes de AMARC en Africa, Europa y Asia.

También se recibieron comentarios y sugerencias de organizaciones y redes de comunicación de la región americana, quienes reconocieron que los **“Principios para un Marco Regulatorio Democrático sobre Radio y TV Comunitaria”** son una herramienta fundamental y adelantaron que acompañarían a AMARC en una presentación del documento ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Jorge Acevedo de la Coordinadora Nacional de Radios (CNR) de Perú, Gerardo Lombardi de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), Rodrigo Villarán del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)

de Perú, Joao Brant de Intervozes de Brasil, Eleonora Rabinovich de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de Argentina, Günther Cyranek de la Oficina de UNESCO en Montevideo, Yanina Valdivieso de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, Valeria Betancourt de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), Eduardo Guerrero de la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (OCLACC), Gabriel Sosa Plata de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), México, Paula Martins de Article 19 en Brasil y Gregorio Salazar de la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

El amplio análisis comparado de marcos regulatorios de todo el mundo y el largo proceso de revisión y aportes desde una diversidad de perspectivas culturales, experiencias y capacidades tan diferentes enriquecieron notablemente el resultado alcanzado, dando lugar a un documento que espera convertirse en una herramienta útil para todos los que trabajan por la democratización de las comunicaciones y la plena vigencia de la libertad de expresión.

María Pía Matta

Vicepresidenta AMARC-ALC

Ernesto Lamas

Coordinador Regional AMARC-ALC

Gustavo Gómez

Director Programa Legislaciones y
Derecho a la Comunicación
AMARC-ALC

Preamble

Freedom of expression and information are fundamental human rights guaranteed by international law, and should be recognized as such by all democratic societies. Communications rights, including the right to fair and equitable access to communication media, should be protected and promoted in the context of the rapid changes generated by information and communication technologies. Press and broadcasting freedoms are key and indivisible aspects of the aforesaid rights.

1 Diversity of media, content and perspectives

Diversity and pluralism are the basic objectives of any regulatory framework for democratic broadcasting.

Effective measures are required to promote diversity of media content and perspectives; access to broadcasting media; and diversity of forms of media ownership, goals and modes of operation, including measures to prevent concentration of media ownership. The regulatory framework must explicitly recognize three differentiated sectors of broadcasting: public/state, commercial and social/non-profit broadcasters. Community media are part of this third group.

2 Recognition and promotion

The recognition and differentiation of community media in national broadcasting law should aim to guarantee their right to information and freedom of expression, ensure media diversity and pluralism, and promote community broadcasting. Such recognition must be accompanied by procedures and public policies of respect, protection and promotion, aimed at ensuring the existence and development of community broadcasting.

3

Definition and characteristics

Community radio and television broadcasters are private entities with public interest objectives, managed by various types of non-profit social organizations. Their fundamental characteristic is the participation of the community in ownership as well as programming, management, operation, financing, and evaluation. Community media are independent and non-governmental media that do not engage in religious proselytism, and are not owned, controlled by or otherwise linked to political parties or commercial entities.

4

Goals and objectives

Community media exist to satisfy the communication needs, and facilitate the exercise of the freedom of expression, of the members of their territorial, ethno-linguistic or interest communities. Their aims are directly related to those of the communities they serve and represent. They include the promotion of social development, human rights, cultural and linguistic diversity, pluralism of information and opinion, democratic values, social communication, peaceful coexistence, and the strengthening of their social and cultural identities. They are pluralistic media and, for that reason, they must ensure and promote access, dialogue and participation in their media of all social movements, races, ethnic groups, genders, sexual orientations, religions, ages and others groups.

5

Technological access

All organized communities and non-profit groups have the right to use all available broadcasting technologies, including cable or other physical platforms, satellite, all radio and television frequency bands, or any other technologies that use the electromagnetic spectrum, in both analog and digital systems. The technical characteristics of a community broadcaster, within the framework of spectrum availability and management, should depend solely on the needs of the community it serves and the broadcaster's communicational project.

6

Universal access

All organized communities and non-profit entities, whether they are geographic or ethno-linguistic communities or communities of interest, in rural or urban areas, have the right to establish and operate community radio or television stations. This means that there should be no arbitrary or pre-established restrictions on their geographical service area, coverage, transmission power, or number of community stations in a particular location, region or country. Any restrictions should be reasonably justified by the limited availability of frequencies or the need to prevent concentration of media ownership.

7

Reserved frequencies

National spectrum management plans should include, in all broadcasting bands, an equitable amount of frequencies reserved for access by community media and other non-commercial media, as a means of guaranteeing their existence. This principle applies also to allocations of new digital broadcasting frequencies.

8

Competent authorities

Allocation of broadcasting licenses, assignment of frequencies and other aspects of the operation of community broadcasters should be regulated by state agencies that are independent of the government or private economic groups. The State must guarantee the effective participation of the civil society in these decision-making processes. Due process and the right to appeal licensing decisions are essential to guarantee the rule of law in this area.

9

Licensing and frequency allocation procedures

The general rule for issuing licenses and allocation broadcast frequencies should be an open, transparent and public competition, which should include public participation mechanisms, such as public hearings. Competitive processes, which may be differentiated according to the different sectors of broadcasting through specific criteria and proceedings, must take into account the nature and specificities of community media in order to guarantee their effective and non-discriminatory participation. The procedure may be initiated by the state, or in response to requests by interested non-profit groups, as long as there are frequencies available. The proceedings should adopt reasonable deadlines.

10

Non-discriminatory requirements and conditions

The administrative, financial and technical requirements imposed on organized communities and non-profit groups interested in establishing community broadcasters should be limited to those strictly necessary for guaranteeing their operations and the full enjoyment of their rights. The licensing terms should be non-discriminatory and consistent with the above principles. The terms of licenses, as well as the evaluation criteria and mechanisms and the application deadlines, should be clearly established by law and widely publicized before the initiation of the procedure.

11

Evaluation criteria

Whenever a selection among multiple license applicants becomes necessary, the evaluation criteria should differentiate among the various broadcasting sectors. In the case of community broadcasters, priority should be granted to factors such as the relevance of the applicant's communicational, social and cultural proposal; community participation in its operations; its history of community work; and its expected contribution to media diversity in the coverage area. The financial capabilities of the applicant organization should not be a selection criteria, although reasonable financial requirements may be imposed to guarantee the sustainability of the broadcaster.

12

Financing

Community media have the right to ensure their financial sustainability, independence and development through resources such as donations, sponsorships, commercial and public advertising, and any other legitimate means. All such resources should be entirely reinvested into the operations of the station and the achievement of its goals and objectives. Any restrictions on the timing or quantity of advertising carried by a community broadcaster must be reasonable and non-discriminatory. Community broadcasters should present regular reports to their communities by making public and transparent the management of their resources.

13

Public resources

States should set up public funds with sufficient resources to ensure the proper development of community media. It is desirable to adopt public policies that exempt community media, in whole or in part, from the payment of fees and taxes, including license fees, in ways consistent with their characteristics and public mission.

14

Digital inclusion

The commitment of States to overcome the digital divide and to include all societal sectors into the Information and Knowledge Society, implies the adoption of mechanisms that ensure access by and the migration of community media to the new technologies. The challenges of media convergence and digitalization should be confronted in the framework of technological and regulatory adaptation, transparency and equity.

FOR MORE INFORMATION

Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de AMARC-ALC

<http://legislaciones.amarc.org> - gusgomez@chasque.net

Telfax: (+598 2) 309 2824 - Montevideo, Uruguay